

## Las novedades de las elecciones del 10 de marzo

El 10 de marzo próximo se realizarán, una vez más, elecciones para asamblea legislativa y concejos municipales. Se trata no sólo de unas nuevas elecciones, sino también de unas elecciones novedosas.

El que sean “nuevas” elecciones, en el sentido de haberse iniciado de nuevo otro proceso electoral, numéricamente distinto de las seis rondas electorales que ha habido en el pasado reciente (elecciones para asamblea constituyente en 1982 y para asamblea legislativa en 1985 y 1988, dos rondas de elecciones presidenciales en 1984 y nuevas elecciones presidenciales en 1989) es algo obvio. Lo que quizá ya no resulte tan obvio es que se trata de unas elecciones “novedosas”. Esto es justamente lo que hay que mostrar: en qué consiste la novedad de las actuales elecciones.

Ciertamente, al igual que las elecciones habidas en la década pasada, los comicios del 10 de marzo se realizarán en un contexto de guerra. En este punto no se diferencian en nada de las seis rondas electorales precedentes. La diferencia fundamental estriba en que, por vez primera en más de una década de guerra, las elecciones se realizarán, no sólo en un contexto de negociación, sino como un instrumento para la negociación. En esto radica también la primera gran novedad que presentan las actuales elecciones en relación a las del pasado.

También en el pasado reciente se ha dado cierta coincidencia de elecciones y negociación, pero esa coincidencia ha consistido en una mera simultaneidad cronológica. En 1985, cuando se dieron

las primeras elecciones legislativas de la década pasada, acababan de realizarse dos rondas de negociación entre el gobierno de Duarte y el FMLN (La Palma y Ayagualo). Pero las elecciones no estuvieron en función de la negociación; al revés, la coyuntura electoral sirvió para olvidarse del fracaso de la negociación en Ayagualo. En 1988, al realizarse nuevas elecciones legislativas, el proceso de diálogo estaba sumido en otra sima, tras el fracaso de la reunión tenida en la Nunciatura Apostólica, en San Salvador. Cuando se efectuaron las elecciones presidenciales de 1989, Duarte estaba en el ocaso de su presidencia, carcomido por el cáncer, sin poder siquiera para que la Fuerza Armada le permitiera la evacuación de los lisiados del FMLN. El proceso de negociación estaba virtualmente roto —si es que puede hablarse de “proceso” de diálogo propiamente tal antes de la reunión de Ginebra, en abril de 1990, cuando la negociación quedó colocada bajo los auspicios de la ONU— y las elecciones sólo sirvieron para profundizar el *impasse* del diálogo. Durante toda la década pasada, el gobierno, la Fuerza Armada, Estados Unidos y las fuerzas sociales y políticas de la derecha pretendieron presentar las elecciones y la negociación como opciones mutuamente excluyentes, al punto de pretender hacer de aquéllas un referéndum contra ésta. Sólo ahora, en el nuevo contexto del diálogo-negociación, las elecciones tienen la posibilidad real de constituirse en un instrumento para la paz.

Desde luego, el que las elecciones sirvan efectivamente a la causa de la negociación es algo que no dependerá del gobierno ni de la Fuerza Arma-

da, aunque sí depende bastante de ellos el evitar que tal cosa ocurra. Obviamente, ni el gobierno ni los militares pueden estar interesados en reorientar las elecciones en función de la negociación, aunque dicen estar interesados en orientarlas para la "paz", entendida a su manera, como un ultimátum al FMLN para que deponga las armas. El que las elecciones sean un instrumento de la negociación depende de las fuerzas democráticas, esto es, de la oposición política real y del apoyo que ésta obtenga de las mayorías populares. ¿Qué posibilidades hay para que esto ocurra?

La presencia más amplia, plural y decidida de la izquierda constituye otro factor novedoso que puede contribuir a hacer de estas elecciones un instrumento para impulsar la negociación. Por primera vez desde la década de los setenta, el espectro de opciones electorales va desde la extrema derecha (ARENA) hasta el marxismo (UDN), pasando por la democracia cristiana y la social-democracia (Convergencia Democrática).

La Convergencia Democrática participó ya en las elecciones presidenciales de 1989, pero las condiciones eran muy distintas a las actuales. Sus partidos integrantes acababan de reincorporarse a la vida política, y carecían virtualmente de infraestructura organizativa y logística a nivel nacional. No había tampoco un proceso de negociación en marcha, ni la discusión intergremial e interpartidaria había alcanzado la madurez que ostenta en la actualidad.

La UDN no quiso participar en dichas elecciones, porque le parecía que seguían siendo un componente legitimador del proyecto contrainsurgente. *A contrariis*, su participación en los actuales comicios reviste especial importancia, porque significa que éstos gozan, hasta cierto punto, del aval del FMLN. Por lo demás, resulta muy llamativo el entusiasmo con que su dirigencia (Mario Aguifada, Aronette Díaz, Norma Guevara, etc.) se ha lanzado a hacer proselitismo; y, sobre todo, la cantidad de recursos que está volcando a la propaganda.

El cambio de actitud del FMLN frente a las elecciones es un tercer factor novedoso. La comandancia general todavía no se ha aclarado del

todo, pero al menos parece haber prometido que no las boicotará militarmente, lo cual constituye un avance de consideración. El 15 de enero, el secretario general del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), Dr. Guillermo Ungo, expresaba su esperanza en que el FMLN "no ensucie las aguas electorales y que asuma una actitud pasiva mientras se desarrolla el proceso". Efectivamente, el FMLN parece haber asumido una postura "neutral": ni a favor ni en contra, sino dejar hacer, dejar pasar —*laissez faire, laissez passer*—, como los buenos liberales. Aparentemente, el FMLN se habría percatado de que su brutal sabotaje contra el transporte y la energía eléctrica en marzo de 1989 revirtió en contra de la Convergencia Democrática, porque los votantes fueron a desquitarse contra ésta los costos a su bienestar que les suponía el sabotaje.

No obstante, por otra parte, el FMLN ha advertido claramente que su neutralidad pasiva como postura de principio frente a las actuales elecciones podría variar, dependiendo de la escalada que pueda darse en la represión. Todas las fuerzas democráticas que están participando en el evento han condicionado también su participación a la prevalencia de libertades mínimas para la organización y la movilización partidaria. La decisión de la izquierda de participar en las elecciones, pues, no es en modo alguno irrevocable. Los dirigentes de la intergremial —algunos de ellos candidatos de la oposición— han advertido que si el gobierno no garantiza las condiciones necesarias para unas elecciones limpias, sus organizaciones afiliadas podrían retirarse de la contienda y boicotear el evento.

Hasta el momento, sin embargo, ningún participante ha abandonado el proceso electoral. Lejos de ello, todos han instado encarecidamente al electorado a concurrir a las urnas el 10 de marzo, incluidos aquellos que siempre habían sostenido que las elecciones eran el principal componente legitimador de la contrainsurgencia. Si, hasta 1989, la izquierda estimó que el votar favorecía al FMLN y desfavorecía a los sectores políticos dominantes, actualmente los papeles se han invertido. Esta vez, el no votar favorece a ARENA —siempre y cuando, desde luego, el que vote no lo

haga por ARENA.

Lo importante, para la izquierda, es votar por la oposición real (PDC, Convergencia y UDN). Un mal menor —preferible al voto por ARENA— sería el PCN, pero se trata de una opción peligrosa, porque dada la reciente derechización del partido tras la salida (¿virtual expulsión?) de Hugo Carrillo y Luis Angel Lagos, su nueva dirigencia podría entrar fácilmente en componendas con ARENA. Lo mismo dígase del MAC, cuyos diputados han funcionado las más de las veces como comparsas legislativos de ARENA. Por su parte, Acción Democrática (AD) constituye una opción sin fuerza ni relevancia, que apenas ha podido inscribir planillas en cinco departamentos.

La postura de la democracia cristiana reviste también alguna novedad. La salida del poder del PDC y la salida de la mayoría de los corruptos del PDC, quienes medraban a su sombra, han hecho un enorme bien al partido. La oposición del PDC a ARENA, ya no desde el poder, sino desde la llanura, lo ha acercado bastante a lo que siempre ha sido la oposición democrática real del país. El

contraste con el MAC ilustra bien este punto, sobre todo cuando se comparan los análisis y posturas de dirigentes como Eduardo Colindres y Gerardo Le Chevalier, con los de figuras como Guevara Lacayo, cuyo discurso político reciente no se diferencia en nada del nivel de análisis que pudiera manejar una buena ama de casa arenera.

En este contexto, la campaña electoral arrancó formalmente el 9 de enero, aunque, de hecho, fue precedida por varias semanas de propaganda larvada, como lo pusieron de relieve las denuncias de la oposición contra ARENA, por haber iniciado su campaña antes del período estipulado por la legislación electoral.

La ratificación de las candidaturas estuvo precedida de un abigarrado rejuego de pláticas y alianzas, no sólo entre los partidos políticos participantes sino, sobre todo, entre éstos y diversas organizaciones sindicales y gremiales. El PDC, por ejemplo, ha incluido en sus planillas de candidatos a varios dirigentes de la UNOC (Amanda Villatoro, Simón Parada, Arturo Magaña, Orlando Arévalo, Miguel Angel Requeno y Eleazar de Je-



sús Benítez) y a Félix Blanco, de la Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS), en lo que parece ser una reedición del "pacto social" suscrito con la UPD para las elecciones presidenciales de 1984.

Por su parte, el secretario general del MAC, Guillermo Guevara Lacayo, ha asegurado que, en su convención política del 13 de enero, dicho partido suscribió un "convenio de unidad" con dirigentes de FESINCONSTRANS, FENAPES, FEDECAS "y otras representaciones sindicales", con lo cual se aseguró "la integración de más de 80 mil personas al MAC en esta contienda electoral". Un par de días después, FEDECAS desmintió que hubiese suscrito ningún pacto con el MAC y menos aún que respaldara ninguna de sus candidaturas, a la vez que advirtió con emprender medidas legales contra quienes utilizaran indebidamente el nombre de la organización.

A su vez, la Convergencia Democrática y la Unión Democrática Nacionalista (UDN) —cuyas pláticas para la integración de una coalición, por iniciativa de la UDN, finalmente, no cristalizaron— han postulado como candidatos a varios cuadros sindicales afiliados a la UNTS, aun cuando esta organización ha afirmado que no entablará alianzas formales con ninguno de los partidos contendientes.

Para la disputa de la alcaldía de San Salvador, ARENA ha propuesto la reelección del actual alcalde, y presidente del partido, Dr. Armando Calderón Sol, mientras que el MAC postula a Mauricio Rodríguez Andrade y el PCN a Carlos Alberto Martínez, ambos personalidades bastante desconocidas. El PDC ratificó la candidatura de la diputada Milagro Azcúnaga de Meléndez, tras resolver las fricciones suscitadas por la postulación de la dirigente de la UNOC, Amanda Villatoro, como candidata a primera diputada propietaria por La Libertad. Originalmente, Milagro Azcúnaga había sido postulada para esa candidatura, pero su sustitución por Amanda Villatoro amenazó con ocasionar un cisma entre los cuadros y bases del PDC en La Libertad. Finalmente, la postulación de la diputada Azcúnaga como candidata a alcaldesa de San Salvador habría zanjado las diferencias. Por su parte, la Convergencia Democrática

ha postulado al Dr. Leandro Uzquiano, economista con estudios en Alemania e investigador de la Universidad de El Salvador; mientras que la UDN dio la gran sorpresa al lanzar la candidatura de Humberto Centeno, combativo dirigente del sindicato de ANTEL y miembro del consejo directivo de la UNTS.

Hasta la fecha, a falta de plataformas legislativas o municipales mínimas, la campaña ha avanzado a ritmo de rumbas, salsas y lambadas plagias, en función de la propaganda partidista. Ni siquiera los partidos de la izquierda han presentado planteamientos de fondo medianamente elaborados, aunque sí algunas de las líneas de fuerza que orientarían su gestión legislativa y municipal, en caso de ganar una cuota suficiente de votos y, sobre todo, de que la parte gubernamental (ARENA y la Fuerza Armada) permitieran que esos votos se materializaran en las cuotas de poder correspondientes a nivel de la asamblea legislativa y de las municipalidades.

Como lo temía la oposición, la campaña ha estado cargada de irregularidades, arbitrariedades, amenazas y medidas intimidatorias de parte de las fuerzas en el poder. De hecho, las primeras denuncias contra ARENA se suscitaron aun antes de que el Consejo Central de Elecciones (CCE) inaugurara oficialmente la campaña, debido, precisamente, a que ARENA inició su propaganda con bastante antelación al período de campaña estipulado por la ley. Posteriormente, la junta de vigilancia de los partidos ha denunciado el uso propagandístico de los símbolos patrios por parte de ARENA, así como la avalancha de publicaciones sobre los presuntos logros de la gestión gubernamental y de las municipalidades controladas por ARENA (particularmente de la alcaldía de San Salvador), lo cual viola no sólo los acuerdos de la comisión interpartidaria, sino también la legislación electoral. La agresividad con que el mayor D'Aubuisson, en sus primeras apariciones de campaña, ha embestido contra el PDC y la Convergencia Democrática, es otra muestra significativa del cariz que ha tomado la campaña electoral de ARENA.

Conforme se han aproximado las elecciones, ARENA ha empezado también a recurrir, de ma-

nera cada vez más desembozada, a la instrumentación de los viejos recursos del oficialismo en función de su campaña. El 2 de febrero, la dirección de la Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS) denunciaba que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) habían iniciado una serie de acciones represivas contra los empleados considerados opositores de ARENA, ordenando traslados de lugar de trabajo sin ninguna justificación.

El caso más significativo en esta línea —si bien el mismo no compromete directamente a ARENA, sino a su aliado legislativo, el MAC— ha sido el del candidato de la Convergencia Democrática a la alcaldía de Santa Ana, Julio César Cruz Padilla, quien denunció, el 29 de enero, haber sido despedido injustificadamente de su cargo de administrador del cine *Principal*, en dicha ciudad, por el director del circuito de teatros nacionales, Guillermo Lacayo Puente, hijo de Guillermo Guevara Lacayo, en abierta violación al artículo 229 del Código Electoral, el cual prohíbe los despidos por motivos de militancia política. Según la denuncia, Lacayo Puente admitió ante el afectado, sin ningún empacho, que había recibido instrucciones de su papá para despedirlo, debido a su afiliación a la Convergencia Democrática.

Con todo, el punto que mayor preocupación suscita en los partidos de oposición se refiere a la abierta hostilidad institucional manifestada por el ejército contra la oposición, y a las medidas intimidatorias de hecho derivadas de tal actitud. Por este motivo, la oposición ha solicitado repetidas veces, como un requisito mínimo para que las elecciones puedan llevarse a cabo, la disolución de las defensas civiles a más tardar en el presente mes de febrero, y la suspensión temporal de las acciones armadas por lo menos entre el 4 y el 12 de marzo.

La Fuerza Armada dice haber tomado disposiciones para garantizar su propia apoliticidad así como el libre desarrollo del proceso electoral, como lo mostraría el instructivo que el Alto Mando presentó el 18 de enero al CCE y a los secretarios generales de los partidos políticos. No obstante, las denuncias de la oposición sobre abusos de autoridad, acciones arbitrarias e incluso ataques ffsi-

cos de efectivos militares y paramilitares contra sus correligionarios, cuadros políticos e instalaciones, han seguido a la orden del día, como lo muestran, entre otros numerosos hechos, el atentado explosivo contra el local de la Convergencia Democrática en Usulután, ubicado dentro del perímetro de seguridad de la Sexta Brigada de Infantería; el allanamiento de la sede del MNR en Santa Ana; el asesinato a mansalva de los esposos García Robles, de la UDN; las amenazas de D'Aubuisson; el atentado contra el *Diario Latino*.

Las encuestas realizadas hasta la fecha revelan mayores simpatías por ARENA que por los otros partidos, pero muestran también que la población tiene mucho temor para expresarse. Por otra parte, un porcentaje relativamente alto de los encuestados manifiesta su intención de concurrir a votar el 10 de marzo. No es muy lógico suponer que quien tiene la intención de votar, pero declina manifestar su preferencia, sea simpatizante de ARENA. Tiene más plausibilidad la hipótesis contraria: que simpatice con la oposición democrática. De alguna manera, el gobierno y la Fuerza Armada intuyen un generalizado encono de la población contra ARENA. Y proceden en consecuencia.

Definitivamente, las elecciones del 10 de marzo tienen su importancia, no sólo por las novedades arriba apuntadas, sino también por la prueba a la que podrían someter a la "democracia" salvadoreña si la oposición llegara a triunfar. Ciertamente, el poder real del país no estará en juego en ellas, porque está en otras manos, que tampoco son las del ejecutivo.

La asamblea legislativa detenta un poder muy parcial, pero su poder formal de veto es importante de cara a frenar algunas iniciativas de la actual gestión gubernamental. El gobierno y la Fuerza Armada se llenan la boca instando al FMLN a deponer las armas, incorporarse al "proceso democrático", participar en las elecciones e implementar sus propuestas de cambio social desde la legalidad constitucional de la asamblea. Si el gobierno y los militares no estuvieran dispuestos a permitir siquiera que la oposición no armada —en su mayor parte demócrata cristiana y social demócrata— controle el poder legislativo, menos aún puede pensarse que permitirían que el FMLN lo hi-

ciera. También por eso son importantes las elecciones del 10 de marzo: porque pondrán a prueba

la solidez de la “democracia” salvadoreña.

C. A.

